

**E.
HARO
TEGLEN**

LA DEGRADACION DEL ESPIRITU CIVICO

LO que sorprende más, en torno al proceso por el múltiple crimen de Atocha, es que un amplio sector de la sociedad ampare, comprenda, se solidarice con los hechos. O, incluso pronunciando palabras de reprobación, considere que pueda tratarse de una causa noble. A la luz de otros acontecimientos desarrollados en España en los últimos años, de este signo político o de otros muy diversos, e incluso comparando todo ello con otros fragmentos crispados de nuestra historia menos reciente, podríamos haber llegado a este punto con menos inocencia y con menos asombro. Pero probablemente en ningún caso, ni ahora ni antes, el desarrollo de la propaganda de todas clases en torno a la solidaridad con los acusados y el odio por las víctimas había tenido tanta fuerza. Ha sido, también, un desarrollo realizado con cierta lentitud. En el momento del crimen, en la fecha del 24 de enero de 1977, nadie se atrevió a pronunciar o escribir, en las paredes o en otro sitio, ninguna frase de aprobación. Hubo, eso sí, silencios: parecían más avergonzados que solidarios del acto. Hubo ausencias notables y visibles en el entierro; pero hubo también cien mil personas en la plaza de las Salesas y sus alrededores, de muy distinta ideología. Es decir, había una enorme sociedad nutrida de virtudes civiles y de ideas éticas de la política y de la convivencia que recusaba el asesinato. En el lapso de tres años largos, esa sociedad ha ido enmudeciendo, perdiendo tensión, cansada o desesperanzada. Y en esos mismos tres años ha ido apareciendo esta otra capa de la sociedad que realiza minuciosas pintadas, o interrumpe el acto del juicio, o escribe artículos, o pronuncia frases cargadas de sentido, para amparar el asesinato, para asumirlo, para meterlo dentro de su propia conciencia, hacerlo entroncar con sus ideas, con sus conceptos de la vida. No es un caso aislado. Otros asesinatos, como los del País Vasco, despiertan otras adhesiones, otras justificaciones, otras reformas de la conciencia para poderlos asumir. Si la propaganda, las muestras de adhesión o de sustento son menos visibles, probablemente no es más que porque a estos últimos les resulta más difícil, tienen menos fuerza, menos medios o menos apoyos.

LO que todo esto está indicando es una degradación del espíritu cívico, del espíritu público. Una situación de guerra civil mental. Es decir, el problema no está en que de cuando en cuando —cada vez con más frecuencia; ya casi cada día— surjan manos armadas que disparan o arrojan bombas —aun contra la residencia del jefe del Gobierno, como sucedió en la noche del jueves al viernes— contra quienes no están en condiciones de defensa —y aunque lo estuvieran—, sino que esas manos armadas no sean solitarias, sino que broten de sectores de la sociedad, que se encuentren representados en ellas. ¿Cómo hemos llegado, en tan poco tiempo, a esta degradación extraordinaria?

HAY varios caminos para investigarlo. Cuando un grupo social dispara y mata, aunque sea lavándose las manos, es porque se siente amenazado en su propia vida. De ninguna ma-

Carteles en favor
de los acusados
en el juicio
por el crimen
de Atocha.



nera trataría de justificar los crímenes de la derecha —y cada vez cuesta más trabajo acudir a la sufrida expresión de "extrema"— por una precedencia de otros crímenes: primero, porque lo injustificable es de por sí injustificable; segundo, porque en cuestión de precedencia hay que remontarse al fondo de los tiempos. Pero hay que relacionar ese estado de miedo y de situación de víctimas con la cuidadosa elección de los atentados de ETA. Caben muy pocas dudas que el tipo de atentados o presiones que se han realizado están destinadas a provocar una determinada reacción de una clase social y de quienes creen que tienen encomendada la defensa de esa clase y de los valores que cree representar esa clase. Se ha escrito muchas veces —aquí mismo— que ese terrorismo ha encontrado la mayor complicidad en quienes estaban interesados, por otras motivaciones, en llevar a esa clase amenazada a la exaltación máxima. Esa especie de terrorismo intelectual y aparentemente aséptico, o por lo menos no perseguible, ha mezclado irresponsablemente el otro terrorismo con una situación social determinada y con unas formas de inseguridad creciente; con el delito común, con las violaciones, con los simples hurtos; de ahí a llevarlo a la alteración de costumbres —considerando alteración todo lo que no responde a sus ideas—, a la irreligiosidad, a los temas de enseñanza, a la crisis de autoridad familiar o a la infiltración de ideas malsanas —siempre sobre su idea de la sanidad— no hay más que un paso: se da cada día. Y todo ello se vierte en una ofensiva común: la democracia es culpable, porque la democracia es tolerancia, o permisividad. Ya hace todo lo posible el Gobierno-UCD por demostrar que no es tolerante ni permisivo, aunque en realidad lo que está haciendo es





invirtiendo el sentido de su tolerancia; pero ya puede ser demasiado tarde. Ya le arrojan granadas directamente, a su propia sede.

TODO ese montaje está dando sus resultados. Estamos solamente en el principio, si no se ataja rápidamente. Se está mezclando todo con todas las impurezas que se vierten sobre nuestra sociedad desde todos los sectores: se está convirtiendo en guerra de clases, en anticomunismo y antifascismo, en datos de guerra fría, en secuelas del gran problema internacional. Se está convirtiendo en paranoia colectiva, en depósito de agresividades patológicas, en vehículo de frustraciones personales. La simultaneidad de la creación del caos y el terror y de la propaganda del caos y el terror está arrastrando a clases sociales que apenas tienen nada de qué beneficiarse con un cambio de sistema democrático, como son las clases medias de reciente ascenso.

LA respuesta democrática es nula. No hay quien reproduzca la indignación, el civismo y la solidaridad del 24 de enero de 1977. Los partidos democráticos se querellan, los sindicatos se enfrentan, los gremios se alzan por sí mismos, los periódicos van desapareciendo, o van estando cada vez más presionados, más amenazados. El miedo ya va siendo de todos.

EXTERNAMENTE parece que se reproducen ciertas condiciones paralelas a las del año 1936. No es más que externamente. Por una parte, los demócratas no deben olvidar que esta vez no habrá ni siquiera una guerra civil en la que tratar de organizar su defensa: no hay relación de fuerzas. Por otra parte, el Gobierno-UCD no puede ignorar que no tiene perdón: no lo tuvieron ni Portela Valladares ni Gil-Robles, ni Eduardo Frei en Chile. Los kerenskys de la antidemocracia lo suelen pasar tan mal como los otros. Que, en el fondo, son uno mismo.

PERO, ¿qué solución puede haber? Se ha llegado a la conclusión de que, en las circunstancias actuales, un cambio de Gobierno nunca podría ser a mejor, por raro que parezca, dentro del sentido democrático. Unas elecciones anticipadas, aparte de que UCD nunca las aceptaría, no darían ningún resultado práctico: no lo dan en Italia, no lo dan en países de trance parecido. Lo que se desea es un refuerzo de los principios mismos de la democracia: un régimen parlamentario hasta sus últimas consecuencias, una libertad de expresión en todos los medios de comunicación, una escuela rápida de libertades, de derechos humanos, de sentido cívico, una meditación serena de todos los que tienen alguna clase de poder. Quizá, en suma, una utopía. ■

ATOCHA

La responsabilidad del Gobierno

FERNANDO LOPEZ AGUDIN

El silencio oficial ante la acusación lanzada por un testigo de extrema derecha contra un funcionario del aparato estatal, independientemente de su veracidad o falsedad, es sumamente indicativa de lo que ha sido y va a ser el primero y último, por lo tanto único, proceso judicial de la anterior dictadura. Porque tal declaración, en línea con la última táctica política ultra de proporcionar datos que demuestren su presencia en los aparatos estatales, tenía la virtud de

razonable a los acusados y hasta retoma la posibilidad de la amnistía para uno de los implicados en este crimen colectivo. El resumen del informe fiscal, que no puede sorprender a ningún observador serio, coincide a por a y b por b con la versión oficial que tiende a despolitizar aquella matanza y a desdibujar la existencia siquiera de una mínima conspiración política contra la democracia. En clara contradicción con su actitud durante la semana trágica de enero de 1977, en la que asumió



Traducido al lenguaje político, cuando aún no ha terminado e independientemente de la sentencia que dicte el Tribunal, el juicio de Atocha está siendo ganado por la extrema derecha. En la foto: Carteles ultras en las calles de Madrid.

presentar una pista real o falsa —pero pista— sobre la conspiración antidemocrática de hace dos años. Es decir, una vez más, como en el reciente caso del estudio electrónico de la calle de San Roque, el Gobierno ha desechado o subestimado la importancia de encontrar el eslabón perdido de esta trama negra; dado que no se tiene en pie la argumentación que tiende a otorgar más credibilidad a unos individuos que plantean interrogativamente la conexión de los inquilinos de San Roque con los órganos de seguridad estatales que a otros de la misma cuerda ideológico-política que señalan huellas ficticias o borradas en lo de Atocha.

Desde ese momento está ya prácticamente sentenciado este juicio. Pocas horas más tarde de esta llamada por respuesta, la petición del representante del ministerio fiscal, realizando de facto el papel que correspondía a la pésima defensa de los procesados, propugna la aplicación de la norma legal más favo-

la clara evidencia política de esta criminal acción como un apartado más de una estrategia desestabilizadora global, ahora el Gobierno lo ha desenchajado del marco político para encuadrarlo en un muy flexible corsé jurídico para los asesinos.

Traducido al lenguaje político, el juicio, cuando aún no ha finalizado, e independientemente de la sentencia que dicte el Tribunal, está siendo ganado por la extrema derecha. Combinando hábilmente la presión desde arriba (la amenaza de bombardear pistas conexonando terroristas con funcionarios del aparato estatal) con la presión desde abajo (asedio permanente de las Salesas con la inacción de las Fuerzas de Orden Público), ha llevado al Gobierno hacia su terreno y está convirtiendo en un fracaso político para los demócratas el único proceso judicial contra los franquistas. Amenazando a un Gobierno involutivo y desacreditado, constatando con asombro la prudencia y moderación de la izquierda, la extrema derecha